



Liderado por Christopher Luxon, del Partido Nacional, el nuevo gobierno conservador logró llevar la inflación al 2,2% reduciendo el gasto público, señala Dennis Wesselbaum, profesor adjunto de economía en la Universidad de Otago, aunque agrega que como consecuencia la economía también se desaceleró.

Queda por ver si el gobierno puede reimpulsar el crecimiento económico, pero en todo caso tiene un plan mucho más claro para lograrlo que el gobierno de Ardern, apunta Wesselbaum, y destaca las nuevas medidas destinadas a generar oportunidades para las inversiones extranjeras, reducir los impuestos y achicar el aparato estatal.

El gobierno también impulsa un proyecto de ley que permitiría que algunos proyectos de infraestructura —en minería, construcción de rutas y desarrollos inmobiliarios— eludan las evaluaciones de impacto ambiental que se les exige.

Derogar leyes progresistas

Además, ha prometido derogar algunas medidas de la era Ardern —como un plan para gravar las emisiones de metano de los animales de granja y la prohibición de la exploración off-shore de gas y petróleo— con el argumento de que perjudican las ganancias de las empresas. Y ha ampliado las operaciones mineras, que según el gobierno podrían convertirse en “una opción atractiva para los inversores y una fuente de prosperidad económica para el país.”

Durante los ocho años que el Partido Laborista de Ardern estuvo en el poder, algunos neozelandeses se desilusionaron con las medidas del gobierno para resolver las desventajas que enfrentan los maoríes, que representan alrededor del 20% de los 5,3 millones de habitantes.

Para esos votantes, la creación de un organismo de salud especializado en la atención a maoríes y otras “acciones afirmativas” en favor de los pueblos originarios eran “privilegios injustos”, señala Lara Greaves, profesora adjunta de ciencias políticas de la Universidad Victoria de Wellington.

Dos partidos más pequeños, ACT y Nueva Zelanda Primero, basaron su campaña electoral en esos temas, defendiendo la “igualdad de derechos” para todos y prometiendo derogar las políticas “basadas en la raza”. “La aplicación forzada de un tono ideológico y cultural que solamente es funcional a la élite izquierdista del país está erosionando y socavando nuestra democracia”, disparó Winston Peters, líder de Nueva Zelanda Primero, durante el mandato de Ardern.

Son opiniones que comparte solo una pequeña porción de los neozelandeses: en las elecciones, ACT obtuvo el 8,6% de los votos y Nueva Zelanda Primero obtuvo el 6%. En consecuencia, los “nacionales” de Luxon, que obtuvieron alrededor del 38%, necesitaban a esos otros dos partidos más pequeños para llegar a la cantidad de votos para formar gobierno, y esa alianza los ha arrastrado más a la derecha.

Yan Zhuang/The New York Times

Cambio en Oceanía

El abrupto giro a la derecha de Nueva Zelanda, tras uno de los gobiernos más progresistas del mundo

La coalición de centroderecha que los sucedió revirtió varias medidas progresistas de su mandato; la dirigente progresista se había hecho muy popular por su gestión de la pandemia.

Un año antes de que la bronca de los votantes norteamericanos por el aumento del costo de vida ayudara a Donald Trump a volver a la presidencia de Estados Unidos, un sentimiento similar llevó al poder a Nueva Zelanda a unos de los gobiernos más conservadores en muchas décadas.

Hoy, Nueva Zelanda se parece muy poco al país que hasta hace un año gobernaba Jacinda Ardern, cuya marca de política empática y progresista la convirtió en un símbolo global del liberalismo anti-Trump.

El nuevo gobierno neozelandés —una coalición de los dos principales partidos de centroderecha y dos pequeños partidos populistas— revirtió muchas de las políticas impulsadas por Ardern: revocó una revolucionaria prohibición de fumar para las próximas generaciones, dio de baja regulaciones tendientes a frenar el cambio climático, y puso a un exlobista de la industria de armas a cargo de reformar la estricta legislación que regula su tenencia en el país.

Protestas maoríes

Y en un país elogiado por haber elevado el estatus de su pueblo originario, la etnia maorí, el nuevo gobierno ha desafiado sus derechos y la presencia de su cultura y su lengua en la vida pública, abriendo una grieta en la sociedad neozelandesa y desencadenando una oleada de protestas: este martes convergieron en el Parlamento decenas de miles de manifestantes, incluidos algunos que vestían atuendos tradicionales maoríes y realizaban la danza

tradicional conocida como haka.

“Simplemente estamos defendiendo nuestra existencia”, declaró Debbie Ngarewa-Packer, copresidenta del Te Pati, el partido maorí, antes de que la caravana de manifestantes llegara a Wellington.

¿Culpa de Ardern?

En cierto modo, este giro hacia la derecha es reflejo del complicado legado de Ardern. Sus políticas contra el coronavirus fueron inicialmente elogiadas, pero terminaron siendo divisivas, y la pandemia también dejó al país con un costo de vida que a la gente se le hace insolventa-

ble. En enero de 2023, cuando Ardern renunció como primera ministra antes de que concluyera su segundo mandato, la inflación rondaba el 7% interanual.

Unos meses después, los votantes dieron su veredicto sobre el mandato de Ardern: aunque había sabido timonear a Nueva Zelanda a través de múltiples crisis, no había logrado cumplir con el cambio transformador que había prometido. “Ya parece algo remoto, como si hubiera pasado mucho tiempo”, dice Richard Shaw, profesor de ciencias políticas de la Universidad Massey. “Hoy nos sentimos como un país radicalmente diferente”.